



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno

19-254

Proceso: **CONSULTA**
Demandante: **LEÓN JAIME RAMÍREZ SALAZAR**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-008-2019-00197-01.**
Decisión: **CONFIRMA CONDENA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

Se reconoce personería a la doctora **NATHALY ANDREA VALENCIA HINESTROSA**, identificada con cédula de ciudadanía número 1,035,855,869 y portadora de la tarjeta profesional de abogado número 274,197 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente los intereses de **COLPENSIONES**, conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, identificado como aparece al pie de su firma, abogado en ejercicio con la tarjeta profesional número 198.214 del C.S. de la J., en calidad de representante legal para procesos de Colpensiones de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 09** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

Pretende el demandante que tras tener en cuenta los ciclos de 2006-08 al 2007-01, 2004-10, 2005-05, 2005-08 que no fueron contabilizados en la historia laboral, se condene a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar la pensión especial de vejez por invalidez, toda vez que cuenta con más de 1000 semanas cotizadas

y una deficiencia superior al 50%, a partir del 1º de agosto de 2014 o en subsidio la pensión de invalidez por contar con más del 75% de las semanas exigidas para la pensión de vejez y más de 25 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la invalidez, conforme el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 o en su defecto se aplique el principio de la condición más beneficiosa, ya que acredita las semanas del Decreto 758 de 1990, los intereses moratorios o la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que mediante resolución SUB 186730 de 2018 COLPENSIONES le negó la pensión de invalidez, con el argumento que en los últimos 3 años anteriores a la invalidez solo tenía 42 semanas cotizadas, por lo que no cumplía con el requisito de 50 semanas en dicho lapso.
- Que el 3 de octubre de 2018 solicitó se reconociera la pensión especial de vejez o en subsidio la de invalidez, explicando de forma detallada en dicho escrito que la entidad demandada dejó de contabilizarle 33.03 semanas, que fueron efectivamente pagadas como afiliado al régimen subsidiado, con las que completa 1.007 semanas.
- Que mediante Resolución SUB 319583 de 2018, esta vez afirmando de forma equivocada que el actor tenía una pérdida de capacidad laboral del 43.42% y un porcentaje de deficiencia de 19.42%, cuando el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que fue debidamente notificado a COLPENSIONES, determinó que tiene una pérdida de capacidad laboral del 71.75%.
- Que a través de la Resolución DIR 244 de 2019 se resolvió el recurso interpuesto contra la resolución anterior, negando nuevamente la prestación e indicando que toda vez que los ciclos de agosto de 2006 a enero de 2007 se encuentran con nota de “valor del subsidio devuelto al Estado” se había realizado un requerimiento interno No. 2009-234351 a la Dirección de Ingresos por Aportes de la Gerencia de Financiamiento, desconociendo que ese requerimiento ya se había realizado, donde la AFP definió que corregiría dicho periodo procediendo a computar los mismos, lo cual nunca se realizó.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto el contenido de las diferentes resoluciones expedidas por la entidad y que el actor solicitó la corrección de su historia laboral. Respecto a los demás señaló que no le constan o se tratan de apreciaciones subjetivas de la parte demandante que serán objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 29 de julio de 2019, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **LEÓN JAIME RAMÍREZ SALAZAR**:

- La pensión de vejez contemplada en el parágrafo 4º numeral 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, a partir del 13 de octubre de 2016, adeudándole como retroactivo hasta el 31 de julio de 2019 la suma de \$28.025.313, de la cual autorizó realizar el descuento del aporte para salud. Y a partir del 1º de agosto de 2019 a continuarle reconociendo una mesada pensional equivalente a \$828.116.
- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 4 de febrero de 2019 y hasta la fecha de pago efectivo.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.312.464.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló para poder acceder a la pensión especial por invalidez consagrada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, se debía acreditarse una deficiencia superior al 50%, 55 años de edad y 1.000 semanas de cotización. Y en el caso de autos estaba debidamente probado que el demandante tenía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 71.75%, con fecha de estructuración 12 de octubre de 2016 y cumplió los 55 años de edad el 14 de diciembre de 2009.

Ahora, respecto al número de semanas cotizadas, indicó la a quo que su bien en la historia laboral visible a folios 111/117 la entidad demandada solo reportaba 974 semanas de cotización, en la misma se observan múltiples inconsistencias, como algunos periodos donde a pesar de haberse cotizado 30 días, se contabilizan menos días como los ciclos de 2002-03, 2003-05, 2003-10 se reportan 30 días, 2004-01, 2004-05, 2005-02, 2005-05, 2005-06 y 2006-04, dejando de sumarle un total de 17.57 semanas que deben ser contabilizadas.

Así mismo, se observan otros ciclos entre comprendidos entre 2001-12 y 2007-01, donde no se tiene en cuenta ninguna semana, con la anotación Subsidio Devuelto al Estado por el Decreto 3771, sin aducir cual fue la causal de devolución, sin embargo, conforme 11 formularios de autoliquidación visibles a folios 25/36, el demandante realizó los pagos correspondientes al parecer mes vencido.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 13542 de 2014, señaló que la suspensión o pérdida del subsidio por las causales establecidas en el Decreto 3771 no puede operar de forma

automática y de pleno derecho, sino que es indispensable que el fondo de pensiones informe al fondo de solidaridad pensional sobre la supuesta falta de pago del demandante de la parte del aporte que le correspondía cancelar, pues en situaciones que involucran la conformación de un derecho de connotación especial como el de acceder a una pensión, le debe dar a la persona la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente con el fin de no comprometer su calidad de beneficiario del esquema solidario en pensión y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez y que ejerza su derecho de contradicción y defensa.

Por lo que consideró que en el caso de autos, al no existir prueba en el expediente de que se haya contactado al demandante y se le haya requerido de las posibles irregularidades que había cometido respecto al aporte, teniendo en cuenta además que se trata de una persona de especial protección por su situación de salud, se deben contabilizar las semanas que fueron efectivamente pagadas por el actor como se demuestra con las planillas de autoliquidación de aportes que ascienden a 41 semana. Por lo que concluyó que al sumar estas 41 semanas, con las 17.57 donde la entidad contabilizó menos días de los cotizados y las 974 semanas que se reportan en la historia laboral, el actor acredita un número superior a las 1.000 semanas cotizadas, cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión de vejez especial por invalidez, por lo que condenó a la entidad a reconocer dicha prestación a partir del 12 de octubre de 2016, fecha de estructuración de la invalidez, para la cual ya tenía reunidos los demás requisitos para acceder a la prestación, en cuantía equivalente al salario mínimo.

Así mismo condenó a la entidad a pagar los intereses moratorios a partir del 4 de febrero de 2019, es decir, 4 meses después de la solicitud presentada por el actor y hasta la fecha del pago efectivo.

2.2. CONSULTA

Dentro del término otorgado por la Ley COLPENSIONES no interpuso recurso de apelación, por lo que el expediente se conocerá en el grado jurisdiccional de **CONSULTA**, según lo dispone el artículo 69 del CPT y SS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, ya que la sentencia le fue adversa a COLPENSIONES. Ello con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51.237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si el demandante tiene derecho a acceder a la pensión especial de vejez por deficiencia

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En el caso de autos se pretendía el reconocimiento de la pensión especial de vejez contemplada en el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que exige como requisitos acreditar una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, 55 años de edad y 1.000 semanas de cotización.

Recuérdese en este punto que tres son los aspectos que se analizan para determinar la merma de una persona, siendo tales la deficiencia que asigna un máximo del 50%, la discapacidad con un 20% y minusvalía el 30%, en su orden se refieren, a grandes rasgos, al daño fisiológico, al impacto en la vida laboral y al impacto en la vida cotidiana. Tal diferenciación generó una discusión en torno a que debía entenderse cuando el parágrafo aludido aludía a una deficiencia, dado que era un componente que integraba la pérdida de capacidad laboral.

Sobre dicha dubitativa razonó la Corte Constitucional mediante sentencia T-007 de 2009, oportunidad donde recordó los motivos que originaron la ley, resaltando la intención del legislador de asegurar una mayor equidad social, solidaridad y responsabilidad fiscal, a través de una prestación que tenía algunos rasgos similares a las pensiones de vejez y de invalidez toda vez que el afiliado podía acceder a una pensión sin necesidad de cumplir estrictamente con la edad de vejez, o con el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de la invalidez según el cual la suma de los criterios antes aludidos debe superar el 50%.

Dicho órgano también precisó que el Manual Único para la Calificación de la Invalidez establecía que una persona podía recibir una porcentaje máximo de 50 en la deficiencia física, psíquica o sensorial, por lo que era imposible jurídicamente que una persona fuera calificada con un porcentaje superior a tal límite en dicho ítem, panorama bajo el cual nunca podría darse aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 4° del aludido artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que consagraba la pensión anticipada de vejez, por lo que de acuerdo al principio interpretativo del efecto útil, estipuló que la persona reunía el requisito previsto en la norma en mención si el porcentaje designado a la deficiencia era de 25 o más. Expresamente dijo:

“Si superan el 25% en el contexto de la calificación de la invalidez, eso significa, en el contexto de la calificación exclusiva de la deficiencia, una deficiencia superior al 50%.”

Aclarado lo anterior, tenemos que para el caso de autos, el señor LEÓN JAIME RAMÍREZ SALZAR, fue calificado con una deficiencia superior al 25%, según dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez visible a folios 38/45 aquella ascendía a 42.55%, de un total de Pérdida de Capacidad Laboral del 71.75%, con fecha de estructuración 12 de octubre de 2016, por lo que cumple con el primer requisito establecido por la norma en comento.

De otro lado, el demandante cumplió los 55 años de edad el 14 de diciembre de 2009, toda vez que nació el mismo día y mes del año 1954, según lo acepta la entidad demandada en la Resolución SUB 186730 de 2018.

Ahora, respecto al número de semanas cotizadas se tiene que si bien en la historia laboral visible a folios 111/117 COLPENSIONES contabiliza un total de 974 semanas cotizadas, en la misma se puede observar que existen varios ciclos donde a pesar de haberse realizado la cotización por 30 días a través del régimen subsidiado, la entidad contabiliza menos días de los realmente cotizados y otros donde no se contabiliza ningún día con la anotación “*valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771*”, sin especificar por cuál de las causales contempladas en la norma en comento se hizo la devolución del subsidio y los ciclos de mayo de 2007 a mayo de 2009, donde a pesar de que se reporta la cotización pagada por el afiliado y esta consignada la referencia de pagos no se tiene en cuenta ningún día con la anotación “No afiliado al régimen subsidiado”, por lo que podría entenderse que al parecer durante estos ciclos el actor perdió el derecho el subsidio, lo que significa que a pesar de que este hizo el aporte, el Estado no realizó el porcentaje que le correspondía.

Al respecto, el artículo 24 del Decreto 3771 de 2007 establece como causales de pérdida del subsidio al aporte en pensión:

- a) Cuando adquiera capacidad de pago para cancelar la totalidad del aporte a la pensión;*
 - b) Cuando cese la obligación de cotizar en los términos del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 o cuando cumplan 65 años de edad, de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 100 de 1993;*
 - c) Cuando se cumpla el período máximo establecido para el otorgamiento del subsidio;*
 - d) Cuando deje de cancelar seis (6) meses continuos el aporte que le corresponde. La entidad administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período.*
- La pérdida del derecho al subsidio por esta causal será por el término de seis (6) meses, contados a partir del momento de la suspensión de la afiliación al programa. Vencido este término, quien fuera beneficiario podrá efectuar una nueva solicitud de ingreso al Fondo de Solidaridad Pensional, hasta completar las 750 semanas subsidiadas, siempre y cuando, cumpla la edad y semanas de cotización o tiempo de servicio, señaladas en la normatividad vigente para ser beneficiarios del mismo;*
- e) Cuando se demuestre que en cualquier tiempo, el beneficiario ha suministrado datos falsos para obtener el subsidio; que se encuentra afiliado a un fondo de pensiones voluntarias, o que posee capacidad económica para pagar la totalidad del aporte.”*

Sin embargo, a folios 25/36 del plenario reposan autoliquidaciones y comprobantes de pago a pensión, mediante los cuales se acredita el pago de los ciclos de octubre de 2004, agosto de 2005, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006 y enero de 2007, donde se si bien se puede observar que algunos de estos ciclos fueron cancelados de forma extemporánea, en los últimos días del mes

correspondiente o incluso en el mes siguiente, en ningún caso se dejó de hacer el aporte durante 6 meses continuos, por lo que carecería de fundamento que se le hubiera retirado el subsidio por falta de pago

Ahora, dentro del plenario no se acreditó que la demandada le haya informado al señor RAMÍREZ SALAZAR que existía una irregularidad en cuanto al pago de sus aportes y que por tanto perdería el subsidio, sino que por el contrario COLPENSIONES continuó recibiendo los pagos sin darle la oportunidad al afiliado de hacer las correcciones pertinentes, pero castigándolo al no contabilizarle las semanas que fueron efectivamente cotizadas.

Al respecto debe tenerse en cuenta la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 50051 de 2014, se analizó un caso similar donde COLPENSIONES no informó al afiliado sobre la pérdida del derecho al subsidio que otorga el fondo de solidaridad pensional, el afiliado continuó cotizando su parte del aporte y durante este periodo se generó una prestación. En este caso dicha Corporación indicó que los afiliados a las administradoras de pensiones no tenían porqué asumir la carga de los errores u omisiones cometidos en el procedimiento de recaudo de los aportes, lo que implicaba que cuando la entidad guardaba silencio ante la presunta irregularidad de un afiliado en el pago de los aportes para pensión y no le hizo la devolución de los mismos en los términos del D.1858/1995 Art. 9, con la modificación introducida por el D. 2414/1998 Art. 1º esto es, que los aportes efectuados por la persona que perdió el subsidio, le sean devueltos junto con sus rendimientos financieros, como si nunca hubiese cotizado al sistema, dichos aportes se deben tener como válidos, toda vez que al afiliado nunca se le informó sobre la pérdida del subsidio y se le continuaron recibiendo sus aportes.

Así mismo, en sentencia con radicado 61479 de 2018, dijo la Corte:

“(…)Ahora bien, uno de los objetivos del Fondo de Solidaridad Pensional, es subsidiar el pago las cotizaciones al sistema general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte.

Este es uno de los desarrollos del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y se encuentra regulado por el Decreto 3771 de 2007, en cuyo precepto 13, modificado por el artículo 1 del Decreto 4944 de 2009, consagra los requisitos para hacerse merecedor de los beneficios de la subcuenta de solidaridad, (...) (…)

Según el artículo 24 *ibidem*, se pierde el derecho al subsidio, cuando se adquiere capacidad para pagar íntegro el aporte, cuando cese la obligación de cotizar, se cumpla el plazo máximo para devengar el subsidio, o se deje de cancelar durante 6 meses el aporte correspondiente, caso en el cual:

[...] la administradora de pensiones correspondiente, tendrá hasta el último día hábil del sexto mes para comunicar a la entidad administradora del Fondo de Solidaridad Pensional sobre tal situación, con el fin de que esta proceda a suspender su afiliación al programa. En todo caso, la administradora del Fondo de Solidaridad Pensional deberá verificar que no se haya cobrado el subsidio durante este período».

Lo anterior significa que ni la suspensión, ni la pérdida del derecho al subsidio operan en forma automática, sino que es indispensable que la entidad informe al Consorcio administrador sobre el supuesto impago de la parte del aporte que le correspondía al demandante.

Es claro para la Sala, especialmente en situaciones que involucran la afectación de un derecho esencial, como el de la pensión de un adulto mayor, la necesidad de brindar la posibilidad de ponerse al día en el pago de la fracción de la cotización a su cargo, lo cual impone que la eventual falta de pago sea puesta en conocimiento del interesado para que adopte la conducta que estime pertinente, en perspectiva de no comprometer su condición de beneficiario del esquema solidario y no poner en riesgo el acceso a la pensión de vejez. En todo caso, para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, que en esta ocasión fue menoscabado por la enjuiciada, en la medida en que no adelantó alguna diligencia para notificar al demandante de la supuesta irregularidad en el pago de sus aportes; es decir, le aplicó una sanción sin enterarlo sobre las razones que la inspiraron.”

Incluso en el caso de autos, según se constata en el CD contentivo del expediente administrativo visible a folio 81, el demandante solicitó en varias oportunidades a COLPENSIONES la corrección de su historia laboral y la inclusión de los periodos faltantes, y en respuesta que se dio a folios 24/25 simplemente se le dijo que estos ciclos se imputarían a periodos posteriores a abril de 2007, lo que tampoco ocurrió, pues según la historia laboral los ciclos de abril a mayo de 2009 aparecen en cero con la anotación “no afiliado al régimen subsidiado”. Así mismo en Resolución DIR 244 de 2019 a folios 57/58 la entidad le dice que los periodos de agosto de 2006 a enero de 2007 que se encuentran con anotación “valor subsidio devuelto al Estado”, se había realizado requerimiento a la Dirección de Ingresos por información al respecto, pero tampoco se le dio solución alguna.

De otro lado, se tiene que en los ciclos de 2002-03, 2003-05, 2003-10, 2004-10, 2005-02, 2005-05, 2005-06, la entidad deja contabilizar algunos días, aplicando aparentemente imputación de pagos amparándose en lo normado en los Decretos 1818 de 1996 y 1406 de 1999, que permite que cuando se paga de forma extemporánea o existe mora por parte del empleador, el pago se imputa primero a los intereses y si queda saldo se imputa a capital, es decir, a días cotizados, por lo que le tuvo en cuenta menos días de los cotizados o incluso ningún día.

Sin embargo, desconoce la entidad que en este caso no se debió aplicar imputación de pagos, toda vez que según lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 43781 de 2013, 59002 de 2018 y 65922 de 2019, los afiliados al régimen subsidiado de pensiones se asimilan a trabajadores independientes, en lo que respecta al pago de los aportes a su cargo, por lo que sus cotizaciones deben hacerse de manera anticipada al sistema y por tanto frente a estos no se genera mora conforme lo dispuesto en los artículos 35 del Decreto 1406 del 28 de julio de 1999 y 23 de la Ley 100 de 1993.

Por consiguiente, si bien es cierto que en el caso de autos algunas de las cotizaciones, se hicieron en época posterior al ciclo que se pretendía cubrir, no por ello debían ser excluidas sino que debieron ser imputadas a periodos posteriores, como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencias 36648 de 2012, 48215 y 44306 de 2014 y 53182 de 2018, entre otras, última donde se indicó:

“...y si bien es cierto que algunas de esas cotizaciones como trabajador independiente, se hicieron en época posterior al ciclo que se pretendía cubrir, no por ello debían ser excluidas del haber de cotizaciones del afiliado, lo cual generó una distorsión en el Colegiado al no considerarlas, pues no pierden validez, sino que debieron ser imputadas a periodos posteriores al pago, como lo ha precisado la Corte entre otras, en la

sentencia CSJ SL13077-2014, máxime que en todo caso, tales pagos se realizaron antes del 29 de febrero de 2008, data en la cual el asegurado arribó a los 60 años de edad.”

Así las cosas, es claro que en el caso del señor RAMÍREZ SALAZAR, la entidad dejó de contabilizar varios días aplicando una imputación de pagos que no es procedente y que por tanto se deben sumar los días realmente cotizados. Y en el mismo sentido le dejó de sumar algunos periodos que fueron efectivamente cotizados como se probó con las autoliquidaciones aportadas, por haberse hecho de forma extemporánea.

Los ciclos y días dejados de contabilizar son los siguientes:

ciclo	fecha de pago	folio prueba	fecha de pago en historia laboral	días reportados	días contabilizados	días dejados de contabilizar	anotación en historia laboral
2002-03			5/01/2002	30	21	9	pago como regimen subsidiado
2003-05			12/03/2003	30	25	5	pago como regimen subsidiado
2004-05			7/04/2004	30	19	11	pago como regimen subsidiado
2004-10	8/11/2004	27	1/10/2004	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2005-02			22/12/2004	30	25	5	pago como regimen subsidiado
2005-05			11/05/2005	30	9	21	pago aplicado al periodo declarado
2005-06			11/05/2005	30	27	3	pago como regimen subsidiado
2005-08	9/09/2005	30	1/08/2005	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2006-08	3/02/2007	31	1/08/2006	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2006-09	19/02/2007	32	1/09/2006	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2006-10	19/02/2007	33	1/10/2006	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2006-11	19/02/2007	34	1/11/2006	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2006-12	26/02/2007	35	1/12/2006	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3771
2007-01	27/02/2007	36	1/01/2007	30	0	30	valor del subsidio devuelto al Estado Decreto 3772
DÍAS DEJADOS DE CONTABILIZAR						294	
SEMANAS DEJADAS DE CONTABILIZAR						42	
SEMANAS HISTORIA LABORAL						974	
TOTAL SEMANAS						1016	

Entonces, al sumar estas **42** semanas que no fueron tenidos en cuenta por la entidad con las **974** semanas que se reflejan en la historia laboral, se tiene que el señor LEÓN JAIME RAMÍREZ SALAZAR acredita un total de **1.016** semanas con las cuales acredita los requisitos para acceder a la pensión de especial de vejez contemplada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación de la Ley 797 de 2003, ya que tiene más de 1.000 semanas cotizadas al sistema, más de 55 años de edad y una deficiencia superior al 50%, como de forma acertada lo analizó el a quo.

Así mismo estima la Sala que fue acertada la decisión de la a quo de condenar al pago de dicha prestación a partir del 12 de octubre de 2016, cuando se estructuró su pérdida de capacidad laboral que corresponde al cumplimiento del último de los requisitos, ya que la edad la había alcanzado en 2009 y las semanas las completó en 2014, cuando dejó de realizar aportes al sistema, siendo su ultimo aporte en julio de ese año. Igualmente se revisó la liquidación del retroactivo efectuada por el a quo, por las mesadas caudas entre el

12 de octubre de 2016 y el 31 de julio de 2019, encontrando que el mismo se encuentra ajustado a derecho, así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	5,75%	3 y 18 días	\$ 689.454	\$ 2.482.034
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	7	\$ 828.116	\$ 5.796.812
2020			\$ 877.803	\$ 0
			TOTAL	\$ 28.025.313

Finalmente, respecto a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

En el caso de la pensión de vejez, éstos se causan cuatro meses después de la presentación de la solicitud, toda vez que es el tiempo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho.

Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, tenemos que el señor LEÓN JAIME RAMÍREZ SALAZAR solicitó la pensión especial de vejez el **3 de octubre de 2018**, según consta a folio 55 oportunidad en la que COLPENSIONES se la negó a través de la Resolución DIR 244 de 2019, indicándole que tenía las semanas exigidas para acceder al derecho. Empero si la entidad hubiera hecho un manejo adecuado de la historia laboral del actor, hubiera determinado que le asistía el derecho en los términos reclamados. Por tanto encuentra la Sala adecuada la decisión del a quo de condenar a los intereses moratorios, los cuales deben contabilizarse a partir del 4 de febrero de 2019 y hasta la fecha de pago efectivo del retroactivo adeudado, como de forma adecuada lo estimó el a quo, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia en este punto..

En consecuencia, la sentencia consultada será CONFIRMADA en su integridad. Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de julio de 2019, dentro del proceso ordinario promovido por el señor **LEÓN JAIME RAMÍREZ SALAZAR** identificado con cedula de ciudadanía 70.076.364 contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto, se notifica en **ESTADOS** y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados,
(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 054 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 5 DE ABRIL DE 2021

Secretario